

EXHIBIT 4

14th District Court in the State of Sonora, *Incidente de suspensión* [interlocutory injunction order], Indirect *amparo* case No. 408/2024, Judge Rocío Monter Reyes (March 14, 2024)

Note on translations: An automatically generated English translation is provided after the copy of the original Spanish version. The translation is provided for convenience of review only. The translation has been reviewed for general agreement with the original text, however, Movants do not certify the veracity of the attached translation. Any excerpts of the attached document that have been cited in the motion for intervention and protest have been thoroughly reviewed by bilingual English and Spanish speakers and certified for their veracity.



Audiencia incidental

En **Hermosillo, Sonora**, siendo las **nueve horas con cincuenta minutos del catorce de marzo de dos mil veinticuatro**, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia incidental relativa al juicio de amparo indirecto **408/2024-III, Rocío Monter Reyes**, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, ante **José Pablo Herrera Rayet**, secretario que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de alguna de las partes.

A continuación, el secretario hizo relación de las constancias de autos, dando lectura a todas las que obran en el cuaderno incidental, haciendo constar que no existen promociones pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico de este cuaderno incidental se encuentra debidamente integrado; **la Jueza acuerda**: ténganse por hechas la relación y certificación secretariales de cuenta.

Abierto el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa, consistente en un tomo de pruebas; **la Jueza acuerda**: con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales de cuenta, que se desahogan sin necesidad de ulterior trámite en atención a su naturaleza, las cuales fueron exhibidas desde la presentación de la demanda y en esta audiencia incidental.

Luego, al no existir otro medio sobre el que proveer, ciérrase la fase probatoria.

Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon; luego, **la jueza provee**: toda vez que las partes no realizaron alegatos ciérrase la etapa preconclusiva de esta incidencia; y,

VISTOS los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo **408/2024-III**, promovido por _____, por derecho propio, contra actos de la **Dirección General de Gestión de Procesos Industriales de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**, con sede en la Ciudad de México, y otra autoridad; y,

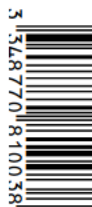
RESULTANDO:

ÚNICO. Trámite del incidente de suspensión. Mediante auto de siete

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JOSE PABLO HERRERA RA YET
70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.9
15/05/26 18:00:00

derecho propio, contra actos de la **Dirección General de Gestión de Procesos Industriales de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y**



CONSIDERANDO:

1] La omisión de verificar el “Estudio de línea base para la caracterización biótica del medio ambiente marino frente a Puerto Libertad” y el “Plan de vigilancia ambiental de ruido marino” cumplieran con las medidas de mitigación; en apego a la primer condicionante del termino sexto del oficio **S.P.G.A./DGIRA.DDT.2277.06** de dieciséis de noviembre de dos mil seis, se autorizó el proyecto denominado “

3] La omisión de supervisar, inspeccionar y vigilar que el regulado haya iniciado la obra, sin dar aviso del inicio de estas, según lo dispuesto en el término octavo del referido oficio.

SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la **Dirección General de Gestión de Procesos Industriales y la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial**, ambas de la **Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**, con sede en la Ciudad de México, pues fueron omisos al rendir sus respectivos informes previos, a pesar de



estar debidamente emplazados a la presente incidencia¹. En consecuencia, y tal como lo establece el artículo 142 de la Ley de Amparo, se procede a presumir la certeza de los actos reclamados.

TERCERO. Análisis sobre la medida cautelar. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 129 y 139 de la Ley de Amparo vigente, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que la parte promovente debe cumplir para que sea procedente la suspensión de los actos reclamados, los cuales a saber son:

- a) Que lo solicite el quejoso; y,
- b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

No está por demás precisar que previo al análisis del posible perjuicio al interés social o la contravención de disposiciones de orden público que conllevaría la concesión de la medida precautoria solicitada, se requiere como presupuesto lógico (1) que existan los actos reclamados, los que se presumirán como ciertos al proveerse sobre la suspensión provisional, en base a la protesta de decir verdad expuesta por la parte quejosa.

Luego, en términos del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta **(2)** la naturaleza de los actos reclamados, de lo que se deriva la obligación de verificar si son susceptibles de suspenderse, para lo que deberán tomarse en consideración la clasificación que de los mismos ha hecho la jurisprudencia (consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera).

Apoya lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son:

Época: Décima Época

Registro: 2007358

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*

Materia(s): (Común)

Tesis: XXVII.3o. J/2 (10a.)

SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de

¹ Vid. Fojas 9 y 10.

Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal.”.

Una vez que se determine la existencia de los actos reclamados en los términos apuntados, así como que estos sean susceptibles de ser suspendidos, debe determinarse si la parte quejosa **(3)** tiene derecho a obtener la medida precautoria solicitada, esto es, si cuenta con interés para ello y que, en caso de ser legítimo, deberá el inconforme acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso que se niegue, y la importancia social que justifique su otorgamiento.

Se cita en apoyo de lo anterior los siguientes precedentes:

“Época: Décima Época

Registro: 2005049

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Libro 1, diciembre de 2013, tomo I

Materia(s): Común

Tesis: 1a./J. 98/2013 (10a.)

Página: 430

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). *Aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Además, son dos situaciones distintas: una, la existencia de actos y otra, acreditar los elementos contemplados en la ley. Por ello, el hecho de que en términos del párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, opere la presunción de existencia del acto reclamado respecto del cual se solicite la suspensión definitiva, es inconducente para tener por*



demostrado el interés del quejoso a fin de obtener dicha medida cautelar y, por tanto, para tener por colmados los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo 124 del mismo ordenamiento. Por ende, el otorgamiento de tal medida se encuentra condicionado a que exista en los cuadernos del incidente de suspensión, por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que tal acto agravia al quejoso, pues no debe pasarse por alto que al resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto que cause o pueda causar daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Esto, en el entendido de que tal demostración indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación.”

“Época: Décima Época

Registro: 2011840

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 31, junio de 2016, tomo II

Materia(s): Común

Tesis: 2a./J. 61/2016 (10a.)

Página: 956

INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.”.

CUARTO. Concesión de la suspensión.

Preámbulo en torno al derecho al medio ambiente.

Inicialmente debe recordarse que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece no sólo el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano, sino, en general, a la protección al

mismo en términos generales, que implica la de la flora y fauna habida en su territorio.

Apoya lo anterior, los precedentes siguientes:

“Época: Décima Época

Registro: 2018635

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. CCXCII/2018 (10a.)

Página: 308

DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU DIMENSIÓN COLECTIVA Y TUTELA EFECTIVA. El derecho humano a un medio ambiente sano posee una dimensión individual, pues su vulneración puede tener afectaciones directas e indirectas sobre las personas en conexidad con otros derechos como a la salud, a la integridad personal o a la vida, entre otros, pero también cuenta con una dimensión colectiva, al constituirse como un interés universal que se debe a generaciones presentes y futuras. No obstante, el reconocimiento de la naturaleza colectiva y difusa de este derecho humano, no debe conducir al debilitamiento de su efectividad y vigencia, ni a la ineficacia de las garantías que se prevén para su protección; por el contrario, conocer y entender esta especial naturaleza debe constituir el medio que permita su tutela efectiva a través de un replanteamiento de la forma de entender y aplicar estas garantías.”

“Época: Décima Época

Registro: 2005811

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I

Materia(s): Constitucional, Civil

Tesis: 1a. LXXXI/2014 (10a.)

Página: 551

PROPIEDAD PRIVADA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. EL ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD QUE REALICE EL JUZGADOR, SÓLO REQUIERE DE UNA MOTIVACIÓN ORDINARIA. De los artículos 4o., 27 y 73, fracción XXIX G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva la facultad constitucional directa de los órganos Estatales competentes de establecer modalidades a la propiedad, a fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, en atención a las necesidades del interés público. Así, considerando que el legislador está constitucionalmente facultado para imponer las modalidades al uso de la propiedad que estime convenientes y que la protección del medio ambiente es una finalidad constitucionalmente legítima, el análisis de razonabilidad que realice el juzgador a las modalidades que se impongan a la propiedad privada a fin de preservar y mantener el medio ambiente -en función del fin buscado, la necesidad y proporcionalidad de la medida-, sólo requiere de una motivación ordinaria.”

Por ello, el interés de la sociedad en la protección de los ecosistemas en que se desenvuelven, debe prevalecer sobre el que tienen los concesionarios para la explotación de recursos naturales cuando esté en riesgo su propia sustentabilidad, pues aquél persigue un fin constitucionalmente válido en beneficio no solo de los habitantes del país, sino del mundo entero.



Antecedentes relevantes.

1. Ahora, la suscrita considera importante precisar que mediante oficio **S.G.P.A./DGIRA.DDT.2277.06** de dieciséis de noviembre de dos mil seis, se autorizó el proyecto denominado “
con una duración de veinticinco años.

2. Posteriormente, mediante oficio **ASEA/UGI/DGGPI/1629/2018** de nueve de agosto de dos mil dieciocho, se autorizaron diversas modificaciones al referido proyecto, entre las que destaca el cambio de la planta de **regasificación** a planta de **licuefacción**, siendo la primera modificación realizada a dicho proyecto.

3. Por otra parte, mediante oficio **ASEA/UGI/DGGPI/2183/2023** de catorce de septiembre de dos mil veintitrés, se autorizó la adecuación de una canalización pluvial fuera de la planta de licuefacción –canales de drenaje de aguas pluviales–, así como las modificaciones tecnológicas relativas al diseño de la referida Terminal, siendo la segunda modificación al referido proyecto.

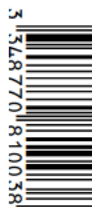
Los actos precisados en los puntos 2 y 3, son actos reclamados por el propio quejoso a la misma responsable dentro de los juicios de amparo **1562/2023** y **13/2024**, del índice propio, que la suscrita considera relevante establecer, lo que constituye hecho notorio para la suscrita en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

Caso concreto.

Ahora bien, la parte quejosa solicita la presente medida aduciendo contar con un interés legítimo, en correlación al medio ambiente.

En efecto, con la exhibición de la digitalización de diversos comprobantes parcelarios, acredita para efectos de esta incidencia, contar con tal derecho objetivo, ya que demuestra que se encuentran cerca del lugar de la construcción de la multicitada terminal.

Asimismo refiere que las omisiones aquí reclamadas ponen en riesgo de manera inmediata o automática, al medio ambiente, pues la multicitada terminal se encuentra en Puerto Libertad, Sonora, pues no puede iniciar su construcción si no cumple con todas las condicionaste referidas en la autorización **S.P.G.A./DGIRA.DDT.2277.06** de dieciséis de noviembre de dos



mil seis, emitida por las responsables.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en jurisprudencia firme ha interpretado el derecho al medio ambiente sano, estatuyendo el llamado **principio de precaución**. Éste implica que ante la duda de que determinada actividad pueda ocasionar daños al ecosistema, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para evitarlo o mitigarlo, aun cuando no exista certidumbre sobre el daño ambiental.

Ilustra lo anterior, el precedente con datos de localización, rubro y texto siguientes:

"Registro digital: 2024374"

Instancia: Primera Sala

Undécima Época

Materias(s): *Administrativa, Constitucional*

Tesis: 1a./J. 11/2022 (11a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 840

Tipo: Jurisprudencia

DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. DIFERENCIA ENTRE LOS PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN Y DE PRECAUCIÓN.

Hechos: Dos personas físicas promovieron juicio de amparo indirecto en el que reclamaron diversos actos y omisiones destinadas a autorizar y realizar el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, aduciendo que no se había garantizado, bajo el estándar más alto de protección, su derecho humano a un medio ambiente sano. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que las quejas no tenían interés legítimo, en contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que dos de los principios rectores del derecho humano al medio ambiente sano son el de prevención y el de precaución, los cuales, si bien están estrechamente relacionados, encuentran diferencias puntuales entre sí.

Justificación: El derecho ambiental se fundamenta en diversos principios que, atendiendo al reciente desarrollo de esta rama del derecho, resultan fundamentales para guiar la actividad jurisdiccional. Uno de ellos es el principio de precaución, conforme al cual, cuando la experiencia empírica refleja que una actividad es riesgosa para el medio ambiente, resulta necesario adoptar todas las medidas necesarias para evitarlo o mitigarlo, aun cuando no exista certidumbre sobre el daño ambiental. Por otra parte, el principio de prevención establece que los Estados deben usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción causen daños significativos al medio ambiente, ya sea dentro o fuera del territorio del Estado de origen. En este sentido, es posible distinguir entre el principio de prevención y el de precaución, pues el primero se fundamenta en el conocimiento acerca de que determinada situación es riesgosa para el medio ambiente, mientras que el segundo opera ante la incertidumbre sobre dicho aspecto. Esto es, la diferencia sustancial entre ambos principios es la certeza que se tiene en relación con el riesgo, pues en el caso de la precaución se demanda una actuación estatal ante la duda de que una actividad pueda ser riesgosa, en cambio, conforme al principio de prevención, existe certeza respecto del riesgo.”

Dicho lo anterior, la suscrita, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 136, 138, 147, 162 y 166, de la ley de la materia, estima precedente conceder la **suspensión definitiva** a la parte quejosa, respecto



de la autorización reclamada S.P.G.A./DGIRA.DDT.2277.06 de dieciséis de noviembre de dos mil seis, mediante la cual se autorizó el proyecto denominado “
”-acto reclamado en este juicio-, toda vez que se satisfacen los requisitos que para la concesión de la medida, establecen los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo. Los cuales se transcriben para mayor claridad:

“Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurren los requisitos siguientes:

1. Que la solicite el quejoso; y

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

(...)"

Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento.

En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.”

Esto es, con la concesión de la medida solicitada por la parte quejosa, no sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, ya que su objeto es el de evitar y/o prevenir un daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo se afecte la salud de las personas.

Por lo tanto, **procede conceder la suspensión definitiva** para que la tercera interesada **”, suspenda la construcción de las obras amparadas en el oficio S.P.G.A./DGIRA.DDT.2277.06** de dieciséis de noviembre de dos mil seis, dado que podría acarrear un daño al medio ambiente y, consecuentemente a la colectividad, lo que no le es permitido al Estado, dado su deber de salvaguardar las posibles violaciones a los derechos humanos.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización son los siguientes:

"Registro digital: 2027842"

Instancia: Primera Sala

Undécima Época

Materias(s): Común, Administrativa

Tesis: 1a./J. 192/2023 (11a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo II, página 1848

Tipo: Jurisprudencia

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL. EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, QUE ESTABLECE UN

REQUISITO MÁS AGRAVADO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN CUANDO LA PARTE QUEJOSA ADUZCA INTERÉS LEGÍTIMO, DEBE INTERPRETARSE A LA LUZ DEL CONVENIO DE ESCAZÚ Y DE LOS PRINCIPIOS IN DUBIO PRO NATURA, DE PREVENCIÓN Y PRECAUTORIO.

Hechos: Un grupo de personas vecinas de la ciudad de Durango promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó la construcción de un puente elevado debido a afectaciones ambientales relativas a la remoción o tala de árboles en un tramo de un parque lineal, solicitando la suspensión de los actos reclamados. La persona Juzgadora de Distrito negó la suspensión definitiva solicitada, al considerar que la parte quejosa no cuenta con interés legítimo puesto que sólo se ostentaron como ciudadanos de la ciudad de Durango, sin hacer valer una calidad específica que los sitúe frente a los actos reclamados de manera especial o diferente, como sería pertenecer a un grupo determinado, tener cercanía al evento o suceso, o ser titular de algún derecho. Tampoco exhibió constancia alguna que acreditara un daño inminente e irreparable que pueda causarle la ejecución de la obra. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 131 de la Ley de Amparo, que establece un requisito más agravado para el otorgamiento de la suspensión cuando el quejoso aduzca interés legítimo, debe interpretarse en materia medioambiental a la luz del artículo 8 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Convenio de Escazú), y de los principios in dubio pro natura, de prevención y precautorio.

Justificación: El referido artículo 131 de la Ley de Amparo establece que cuando la parte quejosa solicita que la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento, requisito que debe interpretarse a la luz de los principios in dubio pro natura, precautorio y de prevención. Esta conclusión permite dar un efecto útil al artículo 8 de la Convención de Escazú, el cual establece la obligación de adoptar fórmulas de legitimación activa amplia tratándose de solicitud de medidas cautelares (o suspensión definitiva) y de adoptar medidas para facilitar la producción de la prueba de daño ambiental. Por ello, en el caso del juicio de amparo, las personas que acuden en defensa del medio ambiente deben probar: a) Un agravio diferenciado, el cual se define con la situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que estima vulnerado, particularmente con sus servicios ambientales; b) Que son beneficiarias de un servicio ambiental, lo cual implica que habitan o utilizan un determinado ecosistema o área de influencia y, aunque es un criterio geográfico, no puede ser entendido como uno de vecindad inmediata ("al lado de"), sino que también deben tomarse en cuenta las zonas donde impactan; c) No necesariamente se debe demostrar el daño al medio ambiente pues ello podría constituir la materia de fondo. Para otorgar la suspensión no puede exigírsele a la parte quejosa cumplir con un estándar de certeza total o indubitable respecto al daño ambiental que torne ilusorio el derecho de participación ciudadana y de acceso a la justicia ambiental, en el sentido de que evite la efectividad del juicio de amparo. Así, cuando se reclame un acto cuya realización indiciariamente pueda traducirse en la consumación del daño ambiental, debe evitarse oportunamente en la medida de lo posible, pues lógicamente una vez realizado el acto reclamado no sería factible lograr –o lo sería difícilmente– que las cosas vuelvan al estado que guardaban. Además, de manera similar a lo que ocurre tratándose del interés legítimo en el juicio de amparo –aunque con un entendimiento más flexible–, en la suspensión, la apariencia del buen derecho en estos casos implica acreditar en forma indiciaria ser beneficiario de los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado. Ese vínculo puede demostrarse cuando la accionante prueba utilizar el entorno adyacente del ecosistema, entendiéndolo como su área de influencia a partir de los servicios ambientales que presta. Por ende, los órganos jurisdiccionales de amparo deben valorar las pruebas que alleguen las partes entendiendo que la demostración del daño inminente e irreparable no es necesariamente fehaciente en la suspensión. Por el contrario, de conformidad con los principios de precaución e in dubio



pro natura, puede afirmarse que se configura el peligro en la demora al advertirse la existencia de un acto que indiciariamente pueda ocasionar daño al medio ambiente. Por ende, los Jueces deben privilegiar la toma oportuna de decisiones que, aun ante la incertidumbre científica de la existencia del daño, permitan la conservación del medio ambiente mientras se resuelve el fondo del juicio. Debe recordarse que un concepto toral del principio de precaución es el riesgo ambiental.”

No se soslaya que, la referida obra, se traduce en un beneficio para la sociedad, por lo que, es necesario que se cumpla con la normativa para evitar que se ocasione un daño grave a las personas, bienes o al medio ambiente cuando se verifique un siniestro con motivo de la realización de las actividades consistentes en transporte, almacenamiento, distribución, compresión, descompresión, licuefacción, regasificación o expendio al público de hidrocarburos o petrolíferos, lo que denota que lo que se pretende proteger es el bienestar público o el interés social.

Ahora, la materia de la suspensión es la ejecución del acto o la prolongación de la omisión reclamada, y no estos en sí mismos, en tanto que sus efectos son los de hacer cesar temporalmente las consecuencias del acto u omisión reclamado, ya sea impidiéndolas cuando no ha empezado la ejecución, deteniéndolas cuando la ejecución ya se ha iniciado o restituyendo provisionalmente el derecho transgredido, situación que en el caso, no ha ocurrido.

Por tanto, no puede perderse de vista que, atendiendo a la materia de la suspensión, la litis en el incidente respectivo es diversa a la que se conforma en el expediente principal, pues en éste se analiza la constitucionalidad del acto u omisión reclamado; de ahí que los argumentos en análisis no sean materia del incidente de suspensión, pues son cuestiones relacionadas con el fondo del asunto.

Finalmente, se precisa que la providencia cautelar de mérito no protege a la quejosa contra actos diversos o similares dictados por autoridades distintas a las señaladas como responsables ni respecto de órdenes emitidas con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda y si no tiene el carácter de parte en el juicio natural.

La presente medida surte sus efectos hasta en tanto las autoridades responsables sean informadas del auto mediante el cual cause ejecutoria la sentencia por la que se resuelva en definitiva el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia.

QUINTO. Garantía. Sin que haya lugar a fijar garantía como requisito

de efectividad, al tratarse de un asunto promovido por un ejidatario en defensa de sus derechos agrarios, de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, son los siguientes:

“Registro digital: 2020148

Instancia: Segunda Sala

Décima Época

Materias(s): Común, Administrativa

Tesis: 2a./J. 80/2019 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, página 2298

Tipo: Jurisprudencia

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO AGRARIO. EL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 132, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, POR EL QUE SE EXENTA A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE EXHIBIR GARANTÍA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA, ES APLICABLE TAMBIÉN A LOS EJIDATARIOS QUE ACUDEN EN LO INDIVIDUAL EN DEFENSA DE SUS DERECHOS AGRARIOS. El artículo 132, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece que "la suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos". Dicho beneficio debe entenderse aplicable también a los ejidatarios que acuden en lo individual al juicio de amparo en defensa de sus derechos agrarios, pues del análisis histórico-evolutivo de las reformas constitucionales y legales referentes al "amparo agrario", se advierte la existencia de un espectro normativo protector que comprende tanto a los sujetos colectivos (ejidos y núcleos de población) como a los individuales (ejidatarios, comuneros, avecindados, etcétera), quienes acuden en defensa de sus derechos agrarios. Sostener lo contrario resultaría discriminatorio y contrario al espíritu del Constituyente, pues implicaría dar un trato desigual a sujetos de derecho agrario regulados bajo el mismo régimen tutelar de derechos."

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELV E:

ÚNICO. Se **concede la suspensión definitiva** solicitada por _____, contra las omisiones reclamadas a la **Dirección General de Gestión de Procesos Industriales y la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, ambas de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**, con sede en la Ciudad de México, en términos indicados en el considerando cuarto de esta resolución.

Notifíquese.

Así lo resolvió y firma electrónicamente **Rocío Monter Reyes**, Jueza Decimocuarta de Distrito en el Estado de Sonora, ante **José Pablo Herrera Rayet**, secretario que autoriza. **Doy fe.**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Karolina
Oficios: 8841 y 8842.

JOSE PABLO HERRERA RA YET
70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.9
15/05/26 18:00:00





Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora

Boulevard Luis Encinas Johnson, número 253, colonia San Benito, código postal 83190, Hermosillo, Sonora

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio.

Mensajería acelerada.

8841/2024	Dirección General de Gestión de Procesos Industriales de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. (Autoridad Responsable) Dirección: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México, Tel: (55) 9126-0100
8842/2024	Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. (Autoridad Responsable) Dirección: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México, Tel: (55) 9126-0100
Ciudad de México.	

En autos del incidente de suspensión 408/2024-III, promovido por [REDACTED], en esta fecha se dictó **un acuerdo** del tenor siguiente:

“VISTOS los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 408/2024-III, promovido por _____, por derecho propio, contra actos de la **Dirección General de Gestión de Procesos Industriales de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**, con sede en la Ciudad de México, y otra autoridad; y,

RESULTANDO:

ÚNICO. Trámite del incidente de suspensión. Mediante auto de siete de marzo de dos mil veinticuatro, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal en proveído de esa misma fecha, se tramitó el incidente de suspensión solicitado por _____, contra actos de la **Dirección General de Gestión de Procesos Industriales de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**, con sede en la Ciudad de México, y otra autoridad, por considerarlos violatorios del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. En términos de los artículos 138, fracción I, 139 y 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados que, en términos del análisis íntegro de la demanda de amparo, consisten en:

1] La omisión de verificar el “Estudio de línea base para la caracterización biótica del medio ambiente marino frente a Puerto Libertad” y el “Plan de vigilancia ambiental de ruido marino” cumplieran con las medidas de mitigación; en apego a la primer condicionante del termino sexto del oficio **S.P.G.A./DGIRA.DDT.2277.06** de dieciséis de noviembre de dos mil seis, se autorizó el proyecto denominado ”.

2] La omisión de verificar que se hayan cumplido las condiciones establecidas en la autorización de la manifestación de impacto ambiental.

3] La omisión de supervisar, inspeccionar y vigilar que el regulado haya iniciado la obra, sin dar aviso del inicio de estas, según lo dispuesto en el término octavo del referido oficio.

La parte quejosa solicita la medida cautelar para que se suspenda la construcción de la ‘ ’, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, se proveerá en lo conducente.

SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Dirección General de Gestión de Procesos Industriales y la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, ambas de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con sede en la Ciudad de México, pues fueron omisos al rendir sus respectivos informes previos, a pesar de estar debidamente emplazados a la presente incidencia². En consecuencia, y tal como lo establece el artículo 142 de la Ley de Amparo, se procede a presumir la certeza de los actos reclamados.

TERCERO. Análisis sobre la medida cautelar. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 129 y 139 de la Ley de Amparo vigente, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que la parte promovente debe cumplir para que sea procedente la suspensión de los actos

² Vid. Fojas 9 y 10.

reclamados, los cuales a saber son:

- a) Que lo solicite el quejoso; y,
b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden o.

No está por demás precisar que previo al análisis del posible perjuicio al interés social o la contravención de disposiciones de orden público que conllevaría la concesión de la medida precautoria solicitada, se requiere como presupuesto lógico **(1)** que existan los actos reclamados, los que se presumirán como ciertos al proveerse sobre la suspensión provisional, en base a la protesta de decir verdad expuesta por la parte quejosa.

Luego, en términos del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta (2) la naturaleza de los actos reclamados, de lo que se deriva la obligación de verificar si son susceptibles de suspenderse, para lo que deberán tomarse en consideración la clasificación que de los mismos ha hecho la jurisprudencia (consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera).

Apoya lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son:

“Época: Décima Época

Registro: 2007358

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Materia(s): (Común)

Tesis: XXVII.3o. J/2 (10a.)

SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal.”

Una vez que se determine la existencia de los actos reclamados en los términos apuntados, así como que estos sean susceptibles de ser suspendidos, debe determinarse si la parte quejosa (3) tiene derecho a obtener la medida precautoria solicitada, esto es, si cuenta con interés para ello y que, en caso de ser legítimo, deberá el inconforme acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso que se niegue, y la importancia social que justifique su otorgamiento.

Se cita en apoyo de lo anterior los siguientes precedentes:

“Época: Décima Época”

Registro: 2005049

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Libro 1, diciembre de 2013, tomo I

Materia(s): Común

Tesis: 1a./J. 98/2013 (10a.)

Página: 430

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA



AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Además, son dos situaciones distintas: una, la existencia de actos y otra, acreditar los elementos contemplados en la ley. Por ello, el hecho de que en términos del párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, opere la presunción de existencia del acto reclamado respecto del cual se solicite la suspensión definitiva, es inconducente para tener por demostrado el interés del quejoso a fin de obtener dicha medida cautelar y, por tanto, para tener por colmados los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo 124 del mismo ordenamiento. Por ende, el otorgamiento de tal medida se encuentra condicionado a que exista en los cuadernos del incidente de suspensión, por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que tal acto agravia al quejoso, pues no debe pasarse por alto que al resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto que cause o pueda causar daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Esto, en el entendido de que tal demostración indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación.”

"Época: Décima Época"

Registro: 2011840

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 31, junio de 2016, tomo II

Materia(s): Común

Tesis: 2a./J. 61/2016 (10a.)

Página: 956

INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.”.

CUARTO. Concesión de la suspensión.

Preámbulo en torno al derecho al medio ambiente.

Inicialmente debe recordarse que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece no sólo el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano, sino, en general, a la protección al mismo en términos generales, que implica la de la flora y fauna habida en su territorio.

Apoya lo anterior, los precedentes siguientes:

"Época: Décima Época

Registro: 2018635

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. CCXCII/2018 (10a.)

Página: 308

DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU DIMENSIÓN COLECTIVA Y TUTELA EFECTIVA. El derecho humano a un medio ambiente sano posee una dimensión individual, pues su vulneración puede tener afectaciones directas e indirectas sobre las personas en conexidad con otros derechos como a la salud, a la integridad personal o a la vida, entre otros, pero también cuenta con una dimensión colectiva, al constituirse como un interés universal que se debe a generaciones presentes y futuras. No obstante, el reconocimiento de la naturaleza colectiva y difusa de este derecho humano, no debe conducir al debilitamiento de su efectividad y vigencia, ni a la ineficacia de las garantías que se prevén para su protección; por el contrario, conocer y entender esta especial naturaleza debe constituir el medio que permita su tutela efectiva a través de un replanteamiento de la forma de entender y aplicar estas garantías.”

“Época: Décima Época

Registro: 2005811

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I

Materia(s): Constitucional, Civil

Tesis: 1a. LXXXI/2014 (10a.)

Página: 551

PROPIEDAD PRIVADA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. EL ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD QUE REALICE EL JUZGADOR, SÓLO REQUIERE DE UNA MOTIVACIÓN ORDINARIA. De los artículos 4o., 27 y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva la facultad constitucional directa de los órganos Estatales competentes de establecer modalidades a la propiedad, a fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, en atención a las necesidades del interés público. Así, considerando que el legislador está constitucionalmente facultado para imponer las modalidades al uso de la propiedad que estime convenientes y que la protección del medio ambiente es una finalidad constitucionalmente legítima, el análisis de razonabilidad que realice el juzgador a las modalidades que se impongan a la propiedad privada a fin de preservar y mantener el medio ambiente -en función del fin buscado, la necesidad y proporcionalidad de la medida-, sólo requiere de una motivación ordinaria."

Por ello, el interés de la sociedad en la protección de los ecosistemas en que se desenvuelven, debe prevalecer sobre el que tienen los concesionarios para la explotación de recursos naturales cuando esté en riesgo su propia sustentabilidad, pues aquél persigue un fin constitucionalmente válido en beneficio no solo de los habitantes del país, sino del mundo entero.

Antecedentes relevantes.

1. Ahora, la suscrita considera importante precisar que mediante oficio **S.G.P.A./DGIRA.DDT.2277.06** de dieciséis de noviembre de dos mil seis, se autorizó el proyecto denominado ‘ ‘ con una duración de veinticinco años.

2. Posteriormente, mediante oficio **ASEA/UGI/DGGPI/1629/2018** de nueve de agosto de dos mil dieciocho, se autorizaron diversas modificaciones al referido proyecto, entre las que destaca el cambio de la planta de **regasificación** a planta de **licuefacción**, siendo la primera modificación realizada a dicho proyecto.

3. Por otra parte, mediante oficio **ASEA/UGI/DGGPI/2183/2023** de catorce de septiembre de dos mil veintitrés, se autorizó la adecuación de una canalización pluvial fuera de la planta de licuefacción –canales de drenaje de aguas pluviales–, así como las modificaciones tecnológicas relativas al diseño de la referida Terminal, siendo la segunda modificación al referido proyecto.

Los actos precisados en los puntos 2 y 3, son actos reclamados por el propio quejoso a la misma responsable dentro de los juicios de amparo **1562/2023** y **13/2024**, del índice propio, que la suscrita considera relevante establecer, lo que constituye hecho notorio para la suscrita en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

Caso concreto.

Ahora bien, la parte quejosa solicita la presente medida aduciendo contar con un interés legítimo, en correlación al medio ambiente.

En efecto, con la exhibición de la digitalización de diversos comprobantes parcelarios, acredita para efectos de esta incidencia, contar con tal derecho objetivo, ya que demuestra que se encuentran cerca del lugar de la construcción de la multicitada terminal.

Aisimismo refiere que las omisiones aquí reclamadas ponen en riesgo de manera inmediata o automática, al medio ambiente, pues la multicitada terminal se encuentra en Puerto Libertad, Sonora, pues no puede iniciar su construcción si no cumple con todas las condicionaste referidas en la autorización **S.P.G.A./DGIRA.DDT.2277.06** de dieciséis de noviembre de dos mil seis, emitida por las responsables.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en jurisprudencia firme ha interpretado el derecho al medio ambiente sano, estatuyendo el llamado **principio de**



precaución. Éste implica que ante la duda de que determinada actividad pueda ocasionar daños al ecosistema, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para evitarlo o mitigarlo, aun cuando no exista certidumbre sobre el daño ambiental.

Ilustra lo anterior, el precedente con datos de localización, rubro y texto siguientes:

"Registro digital: 2024374"

Instancia: Primera Sala

Undécima Época

Materias(s): Administrativa, Constitucional

Tesis: 1a./J. 11/2022 (11a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 840

Tipo: *Jurisprudencia*

DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. DIFERENCIA ENTRE LOS PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN Y DE PRECAUCIÓN.

Hechos: Dos personas físicas promovieron juicio de amparo indirecto en el que reclamaron diversos actos y omisiones destinadas a autorizar y realizar el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, aduciendo que no se había garantizado, bajo el estándar más alto de protección, su derecho humano a un medio ambiente sano. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que las quejas no tenían interés legítimo, en contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que dos de los principios rectores del derecho humano al medio ambiente sano son el de prevención y el de precaución, los cuales, si bien están estrechamente relacionados, encuentran diferencias puntuales entre sí.

Justificación: El derecho ambiental se fundamenta en diversos principios que, atendiendo al reciente desarrollo de esta rama del derecho, resultan fundamentales para guiar la actividad jurisdiccional. Uno de ellos es el principio de precaución, conforme al cual, cuando la experiencia empírica refleja que una actividad es riesgosa para el medio ambiente, resulta necesario adoptar todas las medidas necesarias para evitarlo o mitigarlo, aun cuando no exista certidumbre sobre el daño ambiental. Por otra parte, el principio de prevención establece que los Estados deben usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción causen daños significativos al medio ambiente, ya sea dentro o fuera del territorio del Estado de origen. En este sentido, es posible distinguir entre el principio de prevención y el de precaución, pues el primero se fundamenta en el conocimiento acerca de que determinada situación es riesgosa para el medio ambiente, mientras que el segundo opera ante la incertidumbre sobre dicho aspecto. Esto es, la diferencia sustancial entre ambos principios es la certeza que se tiene en relación con el riesgo, pues en el caso de la precaución se demanda una actuación estatal ante la duda de que una actividad pueda ser riesgosa, en cambio, conforme al principio de prevención, existe certeza respecto del riesgo.”

Dicho lo anterior, la suscrita, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 136, 138, 147, 162 y 166, de la ley de la materia, estima procedente conceder la **suspensión definitiva** a la parte quejosa, respecto de la autorización reclamada **S.P.G.A./DGIRA.DDT.2277.06** de dieciséis de noviembre de dos mil seis, mediante la cual se autorizó el proyecto denominado "—acto reclamado en este juicio—, toda vez que se satisfacen los requisitos que para la concesión de la medida, establecen los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo. Los cuales se transcriben para mayor claridad:

“Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurren los requisitos siguientes:

1. Que la solicite el quejoso; y

*II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
(...)"*

“Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento.

En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.”

Esto es, con la concesión de la medida solicitada por la parte quejosa, no sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, ya que su objeto es el de evitar y/o prevenir un daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo se afecte la salud de las personas.

Por lo tanto, **procede conceder la suspensión definitiva** para que la tercero interesada **”, suspenda la construcción de las obras amparadas en el oficio S.P.G.A./DGIRA.DDT.2277.06** de dieciséis de noviembre de dos

mil seis, dado que podría acarrear un daño al medio ambiente y, consecuentemente a la colectividad, lo que no le es permitido al Estado, dado su deber de salvaguardar las posibles violaciones a los derechos humanos.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización son los siguientes:

"Registro digital: 2027842"

Instancia: Primera Sala

Undécima Época

Materias(s): Común, Administrativa

Tesis: 1a./J. 192/2023 (11a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 32, Diciembre de 2023,

Tomo II, página 1848

Tipo: Jurisprudencia

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL. EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, QUE ESTABLECE UN REQUISITO MÁS AGRAVADO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN CUANDO LA PARTE QUEJOSA ADUZCA INTERÉS LEGÍTIMO, DEBE INTERPRETARSE A LA LUZ DEL CONVENIO DE ESCAZÚ Y DE LOS PRINCIPIOS IN DUBIO PRO NATURA, DE PREVENCIÓN Y PRECAUTORIO.

Hechos: Un grupo de personas vecinas de la ciudad de Durango promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó la construcción de un puente elevado debido a afectaciones ambientales relativas a la remoción o tala de árboles en un tramo de un parque lineal, solicitando la suspensión de los actos reclamados. La persona Juzgadora de Distrito negó la suspensión definitiva solicitada, al considerar que la parte quejosa no cuenta con interés legítimo puesto que sólo se ostentaron como ciudadanos de la ciudad de Durango, sin hacer valer una calidad específica que los sitúe frente a los actos reclamados de manera especial o diferente, como sería pertenecer a un grupo determinado, tener cercanía al evento o suceso, o ser titular de algún derecho. Tampoco exhibió constancia alguna que acreditara un daño inminente e irreparable que pueda causarle la ejecución de la obra. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 131 de la Ley de Amparo, que establece un requisito más agravado para el otorgamiento de la suspensión cuando el quejoso aduzca interés legítimo, debe interpretarse en materia medioambiental a la luz del artículo 8 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Convenio de Escazú), y de los principios in dubio pro natura, de prevención y precautorio.

Justificación: El referido artículo 131 de la Ley de Amparo establece que cuando la parte quejosa solicita que la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento, requisito que debe interpretarse a la luz de los principios *in dubio pro natura*, *precautorio* y de *prevención*. Esta conclusión permite dar un efecto útil al artículo 8 de la Convención de Escazú, el cual establece la obligación de adoptar fórmulas de legitimación activa amplia tratándose de solicitud de medidas cautelares (o suspensión definitiva) y de adoptar medidas para facilitar la producción de la prueba de daño ambiental. Por ello, en el caso del juicio de amparo, las personas que acuden en defensa del medio ambiente deben probar: a) Un agravio diferenciado, el cual se define con la situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que estima vulnerado, particularmente con sus servicios ambientales; b) Que son beneficiarias de un servicio ambiental, lo cual implica que habitan o utilizan un determinado ecosistema o área de influencia y, aunque es un criterio geográfico, no puede ser entendido como uno de vecindad inmediata ("al lado de"), sino que también deben tomarse en cuenta las zonas donde impactan; c) No necesariamente se debe demostrar el daño al medio ambiente pues ello podría constituir la materia de fondo. Para otorgar la suspensión no puede exigírsele a la parte quejosa cumplir con un estándar de certeza total o indubitable respecto al daño ambiental que torne ilusorio el derecho de participación ciudadana y de acceso a la justicia ambiental, en el sentido de que evite la efectividad del juicio de amparo. Así, cuando se reclame un acto cuya realización indiciariamente pueda traducirse en la consumación del daño ambiental, debe evitarse oportunamente en la medida de lo posible, pues lógicamente una vez realizado el acto reclamado no sería factible lograr –o lo sería difícilmente– que las cosas vuelvan al estado que guardaban. Además, de manera similar a lo que ocurre tratándose del interés legítimo en el juicio de amparo –aunque con un entendimiento más flexible–, en la suspensión, la apariencia del buen derecho en estos casos implica acreditar en forma indiciaria ser beneficiario de los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado. Ese vínculo puede demostrarse cuando la accionante prueba el entorno adyacente del ecosistema, entendiéndolo como su área de influencia a partir de los servicios ambientales que presta. Por ende, los órganos jurisdiccionales de amparo deben valorar las pruebas que alleguen las partes entendiendo que la demostración del daño inminente e irreparable no es



“necesariamente fehaciente en la suspensión. Por el contrario, de conformidad con los principios de precaución e in dubio pro natura, puede afirmarse que se configura el peligro en la demora al advertirse la existencia de un acto que indiciariamente pueda ocasionar daño al medio ambiente. Por ende, los Jueces deben privilegiar la toma oportuna de decisiones que, aun ante la incertidumbre científica de la existencia del daño, permitan la conservación del medio ambiente mientras se resuelve el fondo del juicio. Debe recordarse que un concepto toral del principio de precaución es el riesgo ambiental.”

No se soslaya que, la referida obra, se traduce en un beneficio para la sociedad, por lo que, es necesario que se cumpla con la normativa para evitar que se ocasione un daño grave a las personas, bienes o al medio ambiente cuando se verifique un siniestro con motivo de la realización de las actividades consistentes en transporte, almacenamiento, distribución, compresión, descompresión, licuefacción, regasificación o expendio al público de hidrocarburos o petrolíferos, lo que denota que lo que se pretende proteger es el bienestar público o el interés social.

Ahora, la materia de la suspensión es la ejecución del acto o la prolongación de la omisión reclamada, y no estos en sí mismos, en tanto que sus efectos son los de hacer cesar temporalmente las consecuencias del acto u omisión reclamado, ya sea impidiéndolas cuando no ha empezado la ejecución, deteniéndolas cuando la ejecución ya se ha iniciado o restituyendo provisionalmente el derecho transgredido, situación que en el caso, no ha ocurrido.

Por tanto, no puede perderse de vista que, atendiendo a la materia de la suspensión, la litis en el incidente respectivo es diversa a la que se conforma en el expediente principal, pues en éste se analiza la constitucionalidad del acto u omisión reclamado; de ahí que los argumentos en análisis no sean materia del incidente de suspensión, pues son cuestiones relacionadas con el fondo del asunto.

Finalmente, se precisa que la providencia cautelar de mérito no protege a la quejosa contra actos diversos o similares dictados por autoridades distintas a las señaladas como responsables ni respecto de órdenes emitidas con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda y si no tiene el carácter de parte en el juicio natural.

La presente medida surte sus efectos hasta en tanto las autoridades responsables sean informadas del auto mediante el cual cause ejecutoria la sentencia por la que se resuelva en definitiva el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia.

QUINTO. Garantía. Sin que haya lugar a fijar garantía como requisito de efectividad, al tratarse de un asunto promovido por un ejidatario en defensa de sus derechos agrarios, de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, son los siguientes:

"Registro digital: 2020148"

Instancia: Segunda Sala

Décima Época

Materias(s): Común, Administrativa

Tesis: 2a./J. 80/2019 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, página 2298

Tipo: Jurisprudencia

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO AGRARIO. EL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 132, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, POR EL QUE SE EXENTA A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE EXHIBIR GARANTÍA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA, ES APLICABLE TAMBIÉN A LOS EJIDATARIOS QUE ACUDEN EN LO INDIVIDUAL EN DEFENSA DE SUS DERECHOS AGRARIOS. El artículo 132, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece que "la suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos". Dicho beneficio debe entenderse aplicable también a los ejidatarios que acuden en lo individual al juicio de amparo en defensa de sus derechos agrarios, pues del análisis histórico-evolutivo de las reformas constitucionales y legales referentes al "amparo agrario", se advierte la existencia de un espectro normativo protector que comprende tanto a los sujetos colectivos (ejidos y núcleos de población) como a los individuales (ejidatarios, comuneros, avcindados, etcétera), quienes acuden en defensa de sus derechos agrarios. Sostener lo contrario resultaría discriminatorio y contrario al espíritu del Constituyente, pues implicaría dar un trato desigual a sujetos de derecho agrario regulados bajo el mismo régimen tutelar de derechos."

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESOLVE:

ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por
contra las omisiones reclamadas a la **Dirección General de Gestión de
Procesos Industriales y la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial,**
**ambas de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos,** con sede en la Ciudad de México, en términos
indicados en el considerando cuarto de esta resolución.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
77624404_4259000034877081003.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	JOSE PABLO HERRERA RAYET	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.91	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	14/03/24 20:00:33 - 14/03/24 14:00:33	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	89 13 78 d6 c4 9f 5c 19 00 41 d3 15 c8 29 ed 6f 0d 93 03 db 8f d4 a2 86 bd e4 42 2a 82 bf 07 28 5c 90 aa 63 23 d4 f9 97 11 59 b0 ec 55 a4 06 03 cc 6f 31 dc a8 94 85 7b e0 3c 99 2e d8 46 b6 95 d4 61 c3 32 63 d5 68 a9 42 7c 8e 64 65 63 e9 2e d6 88 3e b5 df fa 74 1e 3a e2 8e 16 e0 f5 81 39 6e a6 f1 95 f7 09 9d b2 2b f9 46 4f f2 ee c6 3b d5 37 25 07 36 f1 37 c8 2f 03 4b a6 23 3c b6 6e 06 c7 db 45 75 67 e9 7e a3 da 8b 7e c7 80 d1 3f ea 53 c3 f1 88 e3 dc 51 6b 45 ed 6a 20 98 41 e1 a6 61 88 69 bd fd 41 b7 02 86 e8 fa d6 ed f3 aa e5 3e 12 69 03 36 e6 43 ba 90 89 8c 56 44 07 11 4e b6 0c 78 9c 23 f1 81 18 a3 99 18 ba f8 0a e2 ec 3e 9e 37 d5 97 a0 31 ba cb e5 75 b8 82 0f ba 06 73 b1 6a e6 fa 4d 92 7c df 28 b9 6f 38 ad 50 6a d7 1f 50 79 d2 60 cd fc c7 28 f2 cb 06 6b 2e			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	14/03/24 20:00:33 - 14/03/24 14:00:33			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	14/03/24 20:00:34 - 14/03/24 14:00:34			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	112847070			
Datos estampillados:	OOMaYia8Ww5Vjri1CAC5tKnqM6c=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	ROCIO MONTER REYES	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.1b.c2	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	14/03/24 20:08:58 - 14/03/24 14:08:58	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	62 9c 1e cf 8c ef 43 57 f2 65 12 07 05 cd 38 d2 cb 1c 07 01 07 b0 89 5a f8 07 27 47 f9 e3 ba 4b bf a8 78 6c f4 91 f8 de 80 63 c2 f3 68 49 e3 7d 53 37 0c 8a 67 b2 90 07 f1 20 84 bb e7 66 e2 5d ca 92 35 08 77 3a f5 c1 63 36 14 ed 06 dc 4f 1c 1c af ce 72 8d 2d 1b c2 f4 95 b8 7b 5f 64 ee f5 ef af 0c 0d fb 26 05 7e 9e fa 51 40 fe fe a3 90 51 98 00 2c 3a a3 fa 8c 9d 9a c9 7b 95 bd b6 dc d2 58 5a d7 ae 72 89 77 41 6f 25 9b af 26 61 80 e8 b4 01 96 e6 41 29 97 b5 e4 f6 4c 58 1a 4c df 3a 6f ee 4c 23 6d d5 52 0c c4 a8 f0 02 d7 14 8b 0a e4 a6 3c b9 6b 18 d8 e3 b2 d1 d0 7a ab 26 95 53 53 b4 bb ab be fb f6 ce 3e f8 a5 42 4f f2 ef 83 0e 41 58 c1 45 cd 7a 7b ce 5c a8 f2 8d f5 2a 02 f2 d6 52 ff d6 9c 84 6e 86 2c a5 f8 70 51 dc 1c 25 9e c3 95 79 ae 2b 99 33 e2 cd 61 93 91 77			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	14/03/24 20:08:59 - 14/03/24 14:08:59			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	14/03/24 20:08:59 - 14/03/24 14:08:59			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	112855477			
Datos estampillados:	GS1A3XfrKhWj/MWTsJ4D8ercGnc=			



Incidental hearing

In **Hermosillo, Sonora**, at nine **fifty a.m. on** the fourteenth **of March two thousand twenty-four**, the time and date set for the incidental hearing relating to indirect amparo proceeding **408/2024-III, Rocío** Monter Reyes, Fourteenth District Judge in the State of Sonora, before José Pablo Herrera Rayet, clerk who authorizes and attests, declared it open without the appearance of any of the parties.

The clerk then read the record of the proceedings, reading all those contained in the incidental file, noting that there are no pending motions and that the electronic file of this incidental file is duly integrated; the judge agrees: the clerk's report and certification shall be deemed to have been made.

Once the evidentiary period was opened, the clerk reported on the documentary evidence presented by the complainant, consisting of a volume of evidence; The judge agrees: based on Article 143 of the Amparo Law, the documentary evidence is admitted, which is admitted without further proceedings due to its nature, which was presented at the time the complaint was filed and at this incidental hearing.

Then, as there are no other means of providing evidence, the evidentiary phase is closed.

Once the period for arguments has been opened, the clerk notes that the parties have not made any arguments; then, the judge rules: since the parties have not made any arguments, the preliminary stage of this incidental proceeding is closed; and,

HAVING SEEN the proceedings of the suspension incident relating to the amparo proceeding **408/2024-III**, brought by _____, in its own right, against acts of the General **Directorate of Industrial Process Management of the National Agency for Industrial Safety and Environmental Protection** in the Hydrocarbons Sector, based in Mexico City, and another authority; and,

RESOLVING:

SOLE. Processing of the suspension proceedings. By order of seven

770 8100

38 _____

March two thousand twenty-four, in compliance with the order in the main case file on the same date, the incident of suspension requested by [REDACTED] against acts of the **General Directorate of Industrial Process Management of the National Agency for Industrial Safety and Environmental Protection in the Hydrocarbons Sector**, based in Mexico City, and another authority, on the grounds that they violated Article 4 of the Political Constitution of the United Mexican States; and,

CONSIDERING:

FIRST. Clarification of the acts complained of. In accordance with Articles 138, section I, 139, and 146, section I, of the Amparo Law, the acts complained of are clarified, which, based on a comprehensive analysis of the amparo petition, consist of:

1] The failure to verify that the "Baseline Study for the Biotic Characterization of the Marine Environment off Puerto Libertad" and the "Marine Noise Environmental Monitoring Plan" complied with the mitigation measures; in accordance with the first condition of the sixth term of official letter **S.P.G.A./DGIRA.DDT.2277.06** of November 16, 2006, the project entitled " ".

2] Failure to verify that the conditions established in the environmental impact statement authorization have been met.

3] Failure to supervise, inspect, and monitor that the regulated party has begun the work, without giving notice of the start of such work, as provided for in the eighth term of the aforementioned official letter.

The complainant requests the precautionary measure to suspend the construction of the " , " and therefore, in accordance with the provisions of Article 128 of the Amparo Law, the appropriate measures will be taken.

SECOND. Certainty of the acts claimed. The acts claimed against the General Directorate of Industrial Process Management and the Industrial Supervision, Inspection, and Monitoring Unit, both of the National Agency for Industrial Safety and Environmental Protection in the Hydrocarbons Sector, based in Mexico City, are **certain**, as they failed to submit their respective preliminary reports, despite



P0Dz" UDclAr DE rA FEDEX IÓN

being duly summoned to the present ^{incident1}. Consequently, and as established in Article 142 of the Amparo Law, the acts complained of are presumed to be true.

THIRD. Analysis of the precautionary measure. Articles 107, section X, of the Political Constitution of the United Mexican States, and Articles 128, 129, and 139 of the Amparo Law in force specify the aspects that the judge must take into account, as well as the requirements that the plaintiff must meet in order for the suspension of the acts claimed to be admissible, which are as follows:

- a) That it be requested by the complainant; and,
- b) No further harm should be caused to the public interest, nor should public order provisions be contravened.

It is worth noting that prior to analyzing the possible harm to the public interest or the violation of public order provisions that would result from granting the requested precautionary measure, it is a logical prerequisite (1) that the acts complained of exist, which will be presumed to be true when the provisional suspension is granted, based on the protest of truth presented by the complaining party.

Then, in accordance with Article 107, section X, of the Political Constitution of the United Mexican States, in order to grant the suspension, the nature of the acts complained of must be taken into account, from which derives the obligation to verify whether they are susceptible to suspension, for which purpose the classification of such acts by case law (consummated, negative, future, and uncertain, etc.) must be taken into consideration. etc.).

The above is supported by case law, the location, heading, and text of which are as follows:

*"Period: Tenth Period
Registration: 2007358
Instance: Collegiate Circuit Courts Type of
Thesis: Case Law
Source: Weekly Judicial Journal of the Federation
Subject(s). (Common)
Thesis: XXVII. 3rd. J/2 (10th).
**SUSPENSION AT THE REQUEST OF THE PARTY. REQUIREMENTS FOR
ADMISSIBILITY IN ACCORDANCE WITH THE AMPARO LAW, IN FORCE AS OF
APRIL 3, 2013.**
APRIL 2013. Pursuant to Articles 107, Section X, of the Constitution
of the United Mexican States; Articles 25, 128, and 131 to 158 of the Law on*

¹ See pages 9 and 10.

JOSE PABLO HERRERA RA YET
70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00
15/05/26 18:00:00 00 0000.42.9



Amparo, effective as of April 3, 2013, in the analysis of the suspension, various issues of study must be distinguished, such as: i) the admissibility requirements which, taken together, will determine whether or not the precautionary measure should be granted; ii) the effects of said measure, which consist of a detailed description of what the authorities must do or refrain from doing; iii) the measures or guarantees that, where appropriate, are requested from the complainant so that the effects of the suspension continue; and, iv) the precautions taken by the judge to prevent abuse of the effects of the suspension. With regard to the first issue, except in cases where it is appropriate ex officio or under special regulations, the suspension of the acts challenged may be granted, provided that the following requirements are met in the order indicated: 1. The request of the party; 2. The existence of the act challenged, which in the case of provisional suspension is presumed based on the statements or assertions made by the complainant under oath in their complaint, and for definitive suspension requires that its existence has been accepted or proven; 3. The nature of the act complained of, that is, that the act complained of is susceptible to suspension according to its nature, an analysis in which the classification formulated by the Supreme Court of Justice of the Nation regarding those that admit suspension and those that do not (consummated, negative, future, and uncertain acts, etc.) must be taken into account; 4. The complainant must suffer an adverse effect on their legal or legitimate interest, which must be proven by prima facie evidence for the purposes of provisional suspension and, to a greater degree of proof, for definitive suspension; and 5. The weighing of the appearance of good law and the social interest or public order provisions in the terms developed by the Highest Court.

Once the existence of the acts complained of has been determined in the terms indicated, and that they are susceptible to suspension, it must be determined whether the complainant **(3)** is entitled to obtain the requested precautionary measure, that is, whether it has an interest in doing so and, if so, the complainant must prove the imminent and irreparable harm to its claim if the measure is denied, and the social importance that justifies its granting.

The following precedents are cited in support of the above:

*“Period: Tenth Period
Registration: 2005049
Instance: First Chamber
Type of Thesis: Case Law Book
1, December 2013, Volume I
Subject(s): Common
Thesis: 1a./J. 98/2013
(10a.) Page: 430*

SUSPENSION OF THE ACT UNDER REVIEW. EVEN WHEN THE PRESUMPTION OF ITS EXISTENCE APPLIES, IN TERMS OF THE THIRD PARAGRAPH OF ARTICLE 132 OF THE AMPARO LAW, IN ORDER TO PROVE THE REQUIREMENTS OF SECTIONS I AND III OF ARTICLE 124 OF THAT SAME LAW, IT MUST BE DEMONSTRATED, EVEN IF ONLY PRELIMINARILY, THAT SUCH ACT IS PREJUDICIAL TO THE PLAINTIFF (LEGISLATION IN FORCE UNTIL APRIL 2, 2013). Even the amparo proceeding is an institution of good faith, the requirements established by law for the suspension of the contested act cannot be ignored. Furthermore, these are two different situations: one is the existence of acts and the other is proving the elements contemplated in the law. Therefore, the fact that, under the terms of the third paragraph of Article 132 of the Amparo Law, there is a presumption of the existence of the act complained of in respect of which the definitive suspension is requested is irrelevant for the purposes of



demonstrated the complainant's interest in obtaining such a precautionary measure and, therefore, that the requirements established in sections I and III of Article 124 of the same law have been met. Therefore, the granting of such a measure is conditional upon the existence in the records of the suspension proceedings of at least some evidence that can demonstrate, even if only circumstantially, that such an act would harm the complainant, since it should not be overlooked that, when deciding on this matter, it must be determined whether it is appropriate to suspend any act that causes or may cause damage that is difficult to repair to the aggrieved party. This is understood to mean that such circumstantial evidence must be based on a fact, circumstance, or document that is true and known, by virtue of which, through logical deduction, the judge hearing the appeal can validly presume that the person requesting the precautionary measure will be harmed, in addition to inferring that the execution of the acts complained of will indeed cause them damages that are difficult to repair.

"Period: Tenth Period

Registration: 2011840

Instance: Second Chamber

Type of Thesis: Case Law

Source: Weekly Judicial Gazette of the Federation, Book

3f, June 2016, Part II

Subject(s). Common

Thesis. 2a./J. 61/2016 (10a.)

Page. 956

**IN RE: RÉS Leoíri/o. FOR THE GRANTING OF PROVISIONAL
SP/SPE/TS/Õ/f e/v rúe/r/ovos oer Article 131 oz w res oe
AMPARO, IT IS SUFFICIENT THAT THE PLAINTIFF PROVES IT IN A
MANNER**

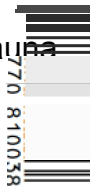
II. DISCUSSION. The aforementioned provision stipulates that when the complainant requesting the suspension alleges a legitimate interest, the court shall grant it when the complainant proves imminent and irreparable harm to his claim if it is denied and the social interest that justifies its granting. However, in the case of the provisional suspension of the acts claimed, it has been the criterion of the Supreme Court of Justice of the Nation that the requirement that the suspension be requested by the aggrieved party implies the demonstration of their interest, even if only on a *prima facie* basis, in order to establish with sufficient certainty that they are indeed the holder of a right. Then, in the case of the provisional suspension of the acts claimed when the complainant requesting it alleges that he has a legitimate interest, it is sufficient that he provide *prima facie* evidence of the imminent and irreparable harm to his claim if it is denied, and the social interest justifying its granting, on the understanding that such granting may in no case have the effect of modifying or restricting rights or constituting rights that the complainant did not have before filing the claim and, furthermore, that such demonstration shall imply the assessment by the judge, in each specific case, of the evidence provided by the complainant and which lead him to infer that the execution of the acts claimed would indeed cause him damage that would be difficult to repair, arising from his special situation in relation to the legal system, without failing to weigh up the appearance of good law and social interest but, above all, that granting the suspension would not cause damage to the social interest or contravene provisions of public order.

FOURTH. Granting of the suspension. Preamble

on the right to the environment.

It should first be recalled that Article 4º of the Political Constitution

The Constitution of the United Mexican States establishes not only the right of Mexicans to a healthy environment, but also, in general, to the protection of the environment itself in general terms, which implies the protection of the flora and fauna found within its territory.





Relevant background.

1 Now, the undersigned considers it important to clarify that by means of official letter **S.G.P.A./DGIRA.DDT.2277.06** dated November 16, 2006, the project called " " was authorized for a period of twenty-five years.

2. Subsequently, by means of official letter **ASEA/UGI/DGGPI/1629/2018** dated August 9, 2018, various modifications to the aforementioned project were authorized, among which the change from a **regasification** plant to a **liquefaction** plant stands out, this being the first modification made to said project.

3. Furthermore, by means of official letter **ASEA/UGI/DGGPI/2183/2023** dated September 14, 2023, the adaptation of a rainwater drainage system outside the liquefaction plant (rainwater drainage channels) was authorized, as well as technological modifications relating to the design of the aforementioned terminal, this being the second modification to the project.

The acts specified in points 2 and 3 are acts claimed by the complainant against the same responsible party in the amparo proceedings **1562/2023 and 13/2024**, of the same index, which the undersigned considers relevant to establish, which constitutes a well-known fact for the undersigned in terms of section 88 of the Federal Code of Civil Procedure, which is applicable to the Amparo Law.

Specific case.

Now, the complainant requests the present measure, claiming to have a legitimate interest in relation to the environment.

Indeed, by presenting the digitization of various parcel receipts, it proves, for the purposes of this incident, that it has such an objective right, since it shows that they are located near the site of the construction of the aforementioned terminal.

It also states that the omissions claimed here pose an immediate or automatic risk to the environment, since the aforementioned terminal is located in Puerto Libertad, Sonora, and cannot begin construction unless it complies with all the conditions set forth in authorization **S.P.G.A./DGIRA.DDT.2277.06** of November 16, 2006.





of the authorization claimed **S.P.G.A./DGIRA.DDT.2277.06** of November 16, 2006, whereby the project known as " "—the act claimed in this lawsuit, since the requirements for granting the measure, established in Articles 128 and 131 of the Amparo Law, are met. These are transcribed for greater clarity:

'Art7cu/o 'f28. *Except in cases where it is appropriate to do so ex officio, suspension shall be ordered in all matters except those indicated in the last paragraph of this article, provided that the following requirements are met.*"
I. *That it is requested by the complainant; and*
II. *That no harm is caused to the public interest or that provisions of public order are not contravened.*
(...)"

'Art7cu/o 131. *When the complainant requesting the suspension alleges a legitimate interest, the court shall grant it when the complainant proves the imminent and irreparable damage to his claim if it is denied, and the social interest justifying its granting.*
Under no circumstances may the granting of the precautionary measure have the effect of modifying or restricting rights or constituting rights that the complainant did not have before the filing of the claim."

That is, granting the measure requested by the complainant does not harm the public interest or contravene public policy provisions, since its purpose is to avoid and/or prevent damage to the environment, the ecological balance, or the health of individuals.

Therefore, **it is appropriate to grant the definitive suspension** so that the interested third party **may suspend the construction of the works covered by official letter S.P.G.A./DGIRA.DDT.2277.06** of November 16, 2006, given that it could cause damage to the environment and, consequently, to the community, which is not permitted by the State, given its duty to safeguard possible violations of human rights.

The above is supported by the case law, the location details of which are as follows:

"Digital record: 2027842
Instance." First Chamber,
Eleventh Period
Subject matter(s). Common, Administrative
Thesis: 1a.fJ. 192f2023 (1 1a.)
Source: Weekly Judicial Gazette of the Federation. Book 32, December 2023,
Volume II, page 1848
Type: Case law
SUSPENSION OF THE ACT CLAIMED E/v MATTER MEo/OAMs/E/vr 1.
ARTICLE 131 OF THE AMPARO LAW, WHICH ESTABLISHES A

JOSE PABLO HERRERA RAYET
70 6a66 2063 6a 6632 00 00 00 00 00 00 00
15/05/26 18:00:00 00:00 42 91





pro natura, it can be said that the danger arises from the delay in warning of the existence of an act that could potentially cause damage to the environment. Therefore, judges must give priority to timely decisions which, even if there is scientific uncertainty about the existence of damage, allow for the conservation of the environment while the merits of the case are being resolved. It should be remembered that the core concept of the precautionary principle is environmental risk.

It cannot be ignored that the aforementioned work translates into a benefit for society, and therefore it is necessary to comply with regulations to prevent serious damage to people, property, or the environment when an accident occurs in the course of activities involving the transport, storage, distribution, compression, decompression, liquefaction, regasification, or sale to the public of hydrocarbons or petroleum products, which indicates that the intention is to protect public welfare or the social interest.

Now, the subject matter of the suspension is the execution of the act or the prolongation of the omission claimed, and not these in themselves, insofar as their effects are to temporarily halt the consequences of the act or omission claimed, either by preventing them when the execution has not begun, stopping them when the execution has already begun, or provisionally restoring the infringed right, a situation that has not occurred in this case.

Therefore, it must not be overlooked that, in view of the subject matter of the suspension, the dispute in the respective incident is different from that in the main proceedings, since the latter analyzes the constitutionality of the act or omission complained of; hence, the arguments under consideration are not the subject matter of the incidental proceeding for suspension, as they are questions relating to the merits of the case.

Finally, it should be noted that the preliminary injunction does not protect the complainant against different or similar acts issued by authorities other than those identified as responsible, nor does it protect her against orders issued after the date of filing of the complaint if she is not a party to the proceedings.

The present measure takes effect until in so the responsible authorities are informed of the order enforcing the judgment that definitively resolves the
FIFTH. Guarantee. No guarantee shall be required as a prerequisite for the granting of the present incidental proceeding.

FIFTH. Guarantee. Without there being any need to establish a guarantee as a requirement

JOSE PABLO HERRERA RA YET
70 6a66 20 63 6a 66 32 00 00 00 00 00
15/05/26 18:00:00



effectiveness, since this is a matter brought by an ejido member in defense of his agrarian rights, in accordance with Article 132 of the Amparo Law.

The above is supported by the case law, the location details of which are as follows:

"Digital registry: 2020148"

Instance: Second Chamber

Tenth Epoch

Subject(s): Common, Administrative

Thesis: 2a./J. 80/2019 (10a.)

Source: Weekly Judicial Gazette of the Federation. Book 67, June 2019, Volume III, page 2298

Type: Case law

SUSPENSION OF AGRICULTURAL PROTECTION. THE BENEFIT ESTABLISHED IN THE LAST PARAGRAPH OF ARTICLE 132 OF THE AMPARO LAW, WHICH EXEMPTS POPULATION CENTERS FROM PROVIDING GUARANTEES FOR THE EFFECTIVENESS OF THE PRECAUTIONARY MEASURE GRANTED, IS ALSO APPLICABLE TO EJIDATARIOS WHO APPLY IN LO INDIVIDUAL IN DEFENSA DE SUS DERECHOS

AGRICULTURAL RIGHTS. The last paragraph of Article 132 of the Amparo Law establishes that "the suspension granted to population centers shall not require a guarantee in order to take effect." This benefit must also be understood to apply to ejido members who individually seek amparo in defense of their agricultural rights, since a historical and evolutionary analysis of the constitutional and legal reforms relating to "agricultural amparo" reveals the existence of a protective regulatory framework that covers both collective subjects (ejidos and population centers) and individuals (ejido members, community members, residents, etc.) who seek to defend their agrarian rights. To argue otherwise would be discriminatory and contrary to the spirit of the Constitution, as it would imply unequal treatment of subjects of agrarian law regulated under the same system of protection of rights."

Based on the foregoing and for the reasons stated, it is hereby

DECIDES:

SOLE. The definitive suspension requested by

against the omissions alleged against the **General Directorate of Industrial Process Management and the Industrial Supervision, Inspection, and Monitoring Unit**, both of the **National Agency for Industrial Safety and Environmental Protection in the Hydrocarbons Sector**, based in Mexico City, is granted in accordance with the terms set forth in the fourth recital of this resolution.

Notify the parties.

So resolved and electronically signed by **Rocío Monter Reyes**,
Fourteenth District Judge in the State of Sonora, before **José Pablo Herrera**
Rayet, authorizing secretary. **I attest.**



Suspension incident 408/204-III

P0Dz" UDlclAr DE rA FEDEX IÓN

Karolina
Oficios. 8841 and
8842.

JOSE PABLO HERRERA RAYET
70 6a66 2063 6a 66 32 00 00 00 00 00 00 00 00
15/05/26 18:00:00





Fourteenth District Court in the State of Sonora

Boulevard Luis Encinas Johnson, number 253, Colonia San Benito, postal code 8319D, Hermosillo, Sonora "2ü24,

Year of *Felipe Carrillo Puerto*, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del *águila*

Official letter.

Express courier.

8841/2024	General Directorate of Industrial Process Management of the National Agency for Industrial Safety and Environmental Protection in the Hydrocarbons Sector. (Responsible Authority) Address: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Mexico City, Tel: (55) 9126-0100
8842/2024	Industrial Supervision, Inspection, and Monitoring Unit of the National Agency for Industrial Safety and Environmental Protection in the Hydrocarbons Sector. (Responsible Authority) Address: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, Postal Code 14210, Mexico City, Tel: (55) 9126-0100
Mexico City	

In the proceedings of suspension incident 408/2024-III, brought by _____, on this date, the following agreement was issued:

^F *V I S T O S the proceedings of the suspension incident relating to the amparo trial 408/2024-III, brought by _____, in its own right, against acts of the General Directorate of Industrial Process Management of the National Agency for Security and Protection of the Environment in the Hydrocarbons Sector, based in Mexico City, and another authority; and,*

RESULTATO.

SOLE. Processing of the suspension incident. By order of March 7, 2024, in compliance with the provisions of the main case file on the same date, the suspension incident requested by

, against acts of the General Directorate/Process Management/nozistria/es oe the National Agency for Industrial Safety and Environmental Protection in the Hydrocarbons Sector, based in Mexico City, and another authority, on the grounds that they violate Article 4 of the Political Constitution of the United Mexican States; and,

CONSIDERING THAT:

FIRST. Specification of the acts challenged. Pursuant to Articles 138, section I, 139, and 146, section I, of the Amparo Law, the acts challenged are specified which, based on a comprehensive analysis of the amparo petition, consist of the following.

1) The omission of v'erilicar the "Baseline study for the biotic characterization of the marine environment off Puerto Libertad" and the "Marine noise environmental monitoring plan" comply with the mitigation measures, in accordance with the first condition of the sixth paragraph of the S.P.G.d./DC/RA.DO7.2277.06 of November 16, 2006, the project entitled "

2) Failure to verify compliance with the conditions established in the environmental impact statement.

3) Failure to supervise, inspect, and ensure that the regulated party has begun the work, without giving notice of the start of such work, as provided for in the eighth term of the referenced official letter.

The complainant requests the precautionary measure to suspend the construction of the _____, and therefore, in accordance with the provisions of Article 128 of the Amparo Law, the appropriate measures will be taken.

SEGLfNOO. Certainty of the acts claimed. The acts claimed from the General Directorate of Industrial Process Management and the Industrial Supervision, Inspection, and Monitoring Unit, both of the National Agency for Industrial Safety and Protection of Human Health and the Environment in the Hydrocarbons Sector, based in Mexico City, are true, as they failed to submit their respective preliminary reports, despite having been duly summoned to do so in the present case. Consequently, and as established in Article 142 of the Amparo Law, the acts claimed are presumed to be certain.

THIRD. Analysis of the precautionary measure. Articles 107, section X, of the Political Constitution of the United Mexican States, and Articles 128, 129, and 139 of the current Amparo Law specify the aspects that the judge must take into account, as well as the requirements that the petitioner must meet in order for the suspension of the acts to be admissible.

² See pages 9 and 10.



The requirements are as follows:

- a) That it be requested by the complainant; and**
b) That no harm be done to the public interest or that provisions of public order be
averted.

It goes without saying that prior to analyzing the possible harm to the public interest or the violation of public order provisions that would result from granting the requested precautionary measure, it is logically necessary (1) that the acts complained of exist, which will be presumed to be true when provisional suspension is granted, based on the protest of truthfulness presented by the complaining party.

Then, in accordance with Article 107, section X, of the Political Constitution of the United Mexican States, in order to grant the suspension, **(2)** the nature of the acts complained of must be taken into account, from which derives the obligation to verify whether they are susceptible to suspension, for which purpose the classification of such acts by case law (consummated, negative, future, and uncertain, etc.).

The above is supported by case law, the location, heading, and text of which are as follows: "Period: Tenth Period

Registration: 2007358

Instance: Collegiate Circuit Courts Type of

Thesis: Case Law

Source: Federal Judicial Weekly Subject(s):

(Common)

Thesis: XXVII.3o. J/2 (10a.)

SUSPENSION AT THE REQUEST OF A PARTY. REQUIREMENTS FOR ADMISSIBILITY UNDER THE AMPARO LAW, IN FORCE AS OF APRIL 3, 2013.

2013. Pursuant to Articles 107, section X, of the Political Constitution of the United Mexican States; 125, 128, and 131 to 158 of the Amparo Law, effective as of April 3, 2013, in the analysis of the suspension, various issues of staggered study must be distinguished, such as: i) the requirements for its admissibility, which, taken together, will result in determining whether or not the precautionary measure should be granted ii) the effects of said measure, which consist of a detailed description of what the authorities must do or refrain from doing; iii) the measures or guarantees that, where appropriate, are requested from the complainant so that the effects of the suspension continue; and, iv) the precautions taken by the judge to prevent abuse of the effects of the suspension. With regard to the first issue, except in cases where it is appropriate ex officio or under special regulations, the suspension of the acts challenged may be granted, provided that the following requirements are met in the order indicated: 1. The request of the party; 2. The existence of the act complained of, which in the case of provisional suspension is presumed on the basis of the statements or assertions made by the complainant under oath in his complaint, and for definitive suspension requires that its existence has been accepted or proven; 3. The nature of the act complained of, that is, that the act complained of is susceptible to suspension according to its nature an analysis in which the classification formulated by the Supreme Court of Justice of the Nation regarding those that admit suspension and those that do not (consummated, negative, future, and uncertain acts, etc.) must be taken into account; 4. The complainant must suffer an adverse effect on their legal or legitimate interest, which must be proven prima facie for the purposes of provisional suspension and, to a greater degree of proof, for definitive suspension; and 5. The weighing of the appearance of good law and the social interest or public order provisions in the terms developed by the Highest Court.

Once the existence of the acts complained of has been determined in the terms indicated, and that they are susceptible to suspension, it must be determined whether the complaining party (3) is entitled to obtain the requested precautionary measure, that is, whether it has an interest in doing so and, if so, whether the complainant must prove the imminent and irreparable harm to its claim if the measure is denied, and the social importance that justifies its granting.

The following precedents are cited in support of the above:

“Period: Tenth Period

Registration: 2005049

Instance: First Chamber

Type of Thesis: Case Law Book 1.

December 2013, Volume I

Subject(s): Common

Thesis: 1a./J. 98/2013 (10a.)

Page: 430

**SUSPENSION OF THE ACT CLAIMED. EVEN WHEN THE PRESUMPTION OF ITS
EXISTENCE APPLIES, IN TERMS OF THE THIRD PARAGRAPH OF ARTICLE
132 OF THE AMPARO LAW, IN ORDER TO PROVE THE REQUIREMENTS OF
SECTIONS I AND III OF ARTICLE 124 OF THAT SAME LAW, IT MUST BE
DEMONSTRATED, EVEN IF ONLY PRELIMINARILY, THAT SUCH ACT IS
PREJUDICIAL**

HUMAN RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT. ITS COLLECTIVE DIMENSION AND EFFECTIVE PROTECTION. The human right to a healthy environment has an individual dimension, since its violation can have direct and indirect effects on individuals in connection with other rights such as health, personal integrity, or life, among others. However, it also has a collective dimension, as it constitutes a universal interest owed to present and future generations. However, recognition of the collective and diffuse nature of this human right should not lead to the weakening of its effectiveness and validity, nor to the ineffectiveness of the guarantees provided for its protection. On the contrary, knowledge and understanding of this special nature should be the means to ensure its effective protection through a rethinking of how these guarantees are understood and applied. Period: Tenth Period

Registration: 2005811

Instance: First Chamber

Type of Thesis: Isolated

Source: Weekly Judicial Gazette of the Federation, Book 4,

March 2014, Volume I

Subject(s): Constitutional, Civil

Thesis: 1a. LXXXI/2014 (10a.)

Page: 551

PRIVATE PROPERTY IN ENVIRONMENTAL MATTERS. THE REASONABLENESS ANALYSIS PERFORMED BY THE JUDGE ONLY REQUIRES A

ORDINARY MOTIVATION. Articles 4, 27, and 73, section XXIX-G, of the Political Constitution of the United Mexican States derive the direct constitutional power of the competent State bodies to establish modalities for property ownership in order to guarantee the right to a healthy environment, in accordance with the needs of the public interest. Thus, considering that the legislature is constitutionally empowered to impose the modalities of property use it deems appropriate and that the protection of the environment is a constitutionally legitimate purpose, the judge's analysis of the reasonableness of the modalities imposed on private property in order to preserve and maintain the environment—in light of the purpose sought, the necessity, and the proportionality of the measure— only requires ordinary reasoning.

Therefore, society's interest in protecting the ecosystems in which they operate must prevail over that of concessionaires for the exploitation of natural resources when their own sustainability is at risk, since the former pursues a constitutionally valid purpose for the benefit not only of the country's inhabitants, but of the entire world.

Relevant background.

1. Now, the undersigned considers it important to specify that by means of official letter **S.G.P.A./DGIRA.DDT.2277.06** of November 16, 2006, the project called " " was authorized for a period of twenty-five years.
2. Subsequently, by means of official letter **ASEA/UGI/DGGPI/1629/2018** dated August 9, 2018, various modifications to the aforementioned project were authorized, among which the change from a **regasification** plant to a **liquefaction** plant stands out, this being the first modification made to said project.
3. Furthermore, by means of official letter **ASEA/UGI/DGGPI/2183/2023** dated September 14, 2023, the adaptation of a rainwater drainage system outside the liquefaction plant (rainwater drainage channels) was authorized, as well as technological modifications relating to the design of the aforementioned terminal, this being the second modification to the project.

*The acts specified in points 2 and 3 are acts claimed by the complainant against the same responsible party in the amparo proceedings **1562/2023 and 13/2024**, of the same index, which the undersigned considers relevant to establish, which constitutes a well-known fact for the undersigned in terms of section 88 of the Federal Code of Civil Procedure, which is applicable to the Amparo Law.*

Specific case.

Now, the complainant requests the present measure, claiming to have a legitimate interest in relation to the environment.

Indeed, by presenting the digitization of various parcel receipts, it proves, for the purposes of this incident, that it has such an objective right, since it shows that they are located near the construction site of the aforementioned terminal.

*It also states that the omissions complained of here pose an immediate or automatic risk to the environment, since the aforementioned terminal is located in Puerto Libertad, Sonora, and cannot begin construction unless it complies with all the conditions referred to in authorization **S.P.G.A./DGIRA.DDT.2277.06** of November 16, 2006, issued by the responsible parties.*

In this regard, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in established case law, has interpreted the right to a healthy environment, establishing the so-called **principle of**



caution. This implies that when there is doubt that a certain activity may cause damage to the ecosystem, the State must take all necessary measures to prevent or mitigate it, even when there is no certainty about the environmental damage.

The following precedent, with location, category, and text, illustrates this point:

"Digital record: 2024374

Instance: First Sa/a Eleventh

Epoch

Subject matter: Administrative, Constitutional

Thesis: 1a./J. 11/2022 (11a.)

Source: Weekly Judicial Gazette of the Federation. Book 12, April 2022, Volume II, page 840

Type: Case law

HUMAN RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT. DIFFERENCE BETWEEN 1ST PR/NC/P/OS OF PREVENTION AND PRECAUTION.

Facts: Two individuals filed an indirect amparo action challenging various acts and omissions aimed at authorizing and carrying out the expansion project of the Port of Veracruz, arguing that their human right to a healthy environment had not been guaranteed under the highest standard of protection. The District Judge dismissed the case, considering that the plaintiffs did not have a legitimate interest. An appeal was filed against this decision.

Legal opinion: The Supreme Court of Justice of the Nation considers that two of the guiding principles of the human right to a healthy environment are prevention and precaution, which, although closely related, have significant differences between them.

Justification: Environmental law is based on various principles which, in light of recent developments in this area of law, are fundamental to guiding judicial activity. One of these is the precautionary principle, according to which, when empirical evidence shows that an activity is harmful to the environment, it is necessary to take all necessary measures to prevent or mitigate it, even if there is no certainty about the environmental damage. On the other hand, the principle of prevention establishes that States must use all means at their disposal to prevent activities carried out under their jurisdiction from causing significant damage to the environment, whether within or beyond the territory of the State of origin. In this sense, it is possible to distinguish between the principle of prevention and the principle of precaution, since the former is based on knowledge that a given situation is risky for the environment, while the latter operates in the face of uncertainty about this aspect. That is, the substantial difference between the two principles is the certainty that exists in relation to risk, since in the case of precaution, state action is required when there is doubt that an activity may be risky, whereas under the principle of prevention, there is certainty regarding the risk.

That said, the undersigned, in accordance with the provisions of Articles 136, 138, 147, 162, and 166 of the relevant law, hereby grant the definitive suspension res of a la parte quejosa, pecto claim la P. Autorización NDT.2277.06 of November 16, 2006, by which the project known as "—the act challenged in this proceeding—is hereby granted, since the requirements for granting the measure, established in Articles 128 and 131 of the Amparo Law, are met. These are transcribed below for greater clarity.

@rtrczi/o 128. Except in cases where it is appropriate to proceed ex officio, suspension shall be ordered in all matters except those indicated in the last paragraph of this article, provided that the following requirements are met:

1. That it is requested by the complainant; and

II. That no harm is caused to the social interest *or that no provisions of public order are contravened.*

 $(\dots)$

⁸ @rtrczi/o 131. When the complainant requesting the suspension alleges a legitimate interest, the court shall grant it when the complainant proves imminent and irreparable harm to his claim in the event of refusal, and the social interest justifying its granting.

Under no circumstances may the granting of the precautionary measure have the effect of modifying or restricting rights or constituting rights that the complainant did not have prior to the filing of the complaint.

That is, granting the measure requested by the complainant does not harm the public interest or contravene public policy provisions, since its purpose is to prevent damage to the environment or ecological balance or, for that reason, to the health of persons.

Therefore, it is appropriate to grant the suspension of the initiative so that the third party interested party _____, suspend construction of the roads covered by the Ü.P.G.A./DGIRA.DDT.2277.06 of November 16, 2006

, given that it could cause damage to the environment and, consequently, to the community, which is not permitted by the State, given its duty to safeguard possible violations of human rights.

The above is supported by the case law, the location details of which are as follows:

"Digital registry: 2027842"

Instance: First Chamber

Eleventh Period

Subject(s): Common, Administrative

Thesis: 1a./J. 192/2023 (11a.)

Source: *Weekly Judicial Gazette of the Federation*. Book 32, December 2023, Volume II, page 1848

Type: Case law

SUSPENSION OF THE ACT CHALLENGED IN AN ENVIRONMENTAL MATTER. ARTICLE 131 OF THE AMPARO LAW, WHICH ESTABLISHES A MORE STRINGENT REQUIREMENT FOR GRANTING SUSPENSION WHEN THE PLAINTIFF ALLEGES A LEGITIMATE INTEREST, MUST BE INTERPRETED IN LIGHT OF THE ESCAZÚ AGREEMENT AND THE PRINCIPLES OF IN DUBIO PRO NATURA, PREVENTION, AND PRECAUTION.

Facts: A group of residents of the city of Durango filed an indirect amparo action claiming that the construction of an elevated bridge would cause environmental damage due to the removal or felling of trees in a section of a linear park, requesting the suspension of the acts complained of. The District Judge denied the requested definitive suspension, considering that the complainant did not have a legitimate interest since they only claimed to be citizens of the city of Durango, without asserting a specific quality that placed them in a special or different position with regard to the acts complained of, such as belonging to a specific group, having proximity to the event or occurrence, or being the holder of a right. Nor did they provide any evidence of imminent and irreparable harm that could be caused by the execution of the work. Dissatisfied, the complainant filed an appeal for review.

Legal criteria: The First Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation considers that Article 131 of the Amparo Law, which establishes a more stringent requirement for the granting of suspension when the complainant alleges a legitimate interest, must be interpreted in environmental matters in light of Article 8 of the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean (Escazú Agreement), and the principles of in dubio pro natura, prevention, and precaution.

Justification: The aforementioned Article 131 of the Amparo Law establishes that when the complaining party requests that the suspension be based on a legitimate interest, the court shall grant it when there is evidence of imminent and irreparable harm to the claimant's claim if it is denied and the social interest justifying its granting, a requirement that must be interpreted in light of the principles of *in dubio pro natura*, precautionary, and prevention. This conclusion gives practical effect to Article 8 of the Escazú Convention, which establishes the obligation to adopt broad standing requirements for requests for precautionary measures (or definitive suspension) and to adopt measures to facilitate the production of evidence of environmental damage. Therefore, in the case of amparo proceedings, persons seeking to defend the environment must prove: a) A differentiated grievance, which is defined by the situation of the person or community with respect to the ecosystem they consider to have been harmed, particularly with regard to its environmental services; b) That they are beneficiaries of an environmental service, which implies that they inhabit or use a particular ecosystem or area of influence and, although this is a geographical criterion, it cannot be understood as one of immediate neighborhood ("next to"), but must also take into account the areas where they have an impact; c) It is not necessary to prove damage to the environment, as this could constitute the subject matter of the case. In order to grant the suspension, the complainant cannot be required to meet a standard of total or unquestionable certainty regarding the environmental damage that would render illusory the right to citizen participation and access to environmental justice, in the sense that it would prevent the effectiveness of the amparo proceeding. Thus, when an act is challenged whose performance may, on the basis of *prima facie* evidence, result in the consummation of environmental damage, it must be avoided in a timely manner to the extent possible, since, logically, once the challenged act has been performed, it would not be feasible—or would be difficult—to restore the situation to its previous state. Furthermore, similar to what happens in the case of legitimate interest in amparo proceedings—although with a more flexible understanding—in suspension proceedings, the appearance of a legitimate interest in these cases implies proving, on the basis of evidence, that one is a beneficiary of the environmental services provided by the ecosystem that is allegedly being harmed. This link can be demonstrated when the plaintiff proves that they use the area adjacent to the ecosystem, understood as its area of influence based on the environmental services it provides. Therefore, the amparo courts must assess the evidence submitted by the parties, understanding that the demonstration of imminent and irreparable harm is not



necessarily proven in the suspension. On the contrary, in accordance with the principles of precaution and in dubio pro natura, it can be affirmed that danger arises from the delay in warning of the existence of an act that may indicate that it could cause damage to the environment. Therefore, judges must give priority to decisions that, even in the face of scientific uncertainty about the existence of damage, allow for the conservation of the environment while the merits of the case are being resolved. It should be remembered that a key concept of the precautionary principle is environmental bias.

It should not be forgotten that the aforementioned work translates into a benefit for society, and therefore it is necessary to comply with regulations to prevent serious harm to people, property, or the environment when an accident occurs in the course of activities involving the transport, storage, distribution, compression, decompression, liquefaction, regasification, or sale to the public of hydrocarbons or petroleum products, which indicates that the intention is to protect public welfare or the social interest.

Now, the purpose of the suspension is the execution of the act or the continuation of the omission claimed, and not these in themselves, insofar as their effects are to temporarily halt the consequences of the act or omission claimed, either by preventing them when the execution has not yet begun, by stopping them when the execution has already begun, or by provisionally restoring the right that has been infringed, a situation that, in this case, has **not** occurred.

Therefore, it must not be forgotten that, given the purpose of the suspension, the subject matter of the respective incidental proceeding is different from that of the main proceedings, since the latter analyzes the constitutionality of the act or omission complained of; hence, the arguments under analysis are not the subject matter of the incidental proceeding for suspension, since they are questions related to the merits of the case.

Finally, it should be noted that the precautionary measure does not protect the complainant against different or similar acts issued by authorities other than those identified as responsible, *nor* against orders issued after the date of filing of the complaint, if they are not parties to the proceedings.

This order shall remain in effect until the *responsible authorities are informed of the ruling by means of the judgment that granted the preliminary injunction from which the present incident derives.*

FIFTH. Guarantee. Without there being any need to provide a guarantee as a requirement for effectiveness, as this is a case brought by a member of an ejido in defense of his rights, in accordance with Article 132 of the Amparo Law.

The above is supported by case law, the details of which are as follows:

"Digital record: 2020148"

Instance: Second Sa/a Tenth

Epoch

Subject matter: Common, Administrative

Thesis: 2a./J. 80/2019 (10a.)

Source: Weekly Judicial Gazette of the Federation. Book 67, June 2019, Volume III, page 2298

Type: Case law

SL/SPENS/ÓN IN AGRICULTURAL AMPARO. THE BENEFIT IS ESTABLISHED IN THE a/tricur o isz, LAST PARAGRAPH, OF THE AMPARO LAW, WHICH EXEMPTS 105 POPULATION CENTERS FROM EXHIBIn o R Nrí» n»n» THAT ARISES SL/S EFFECTS OF THE PRECAUTIONARY MEASURE GRANTED, IS ALSO APPLICABLE TO THE EJ/OA7AR/OS WHO APPEAR INDIVIDUALLY IN DEFENSE

OF THEIR AGRICULTURAL RIGHTS. Article 132, last paragraph, of the Amparo Law establishes that "the suspension granted to population centers does not require a guarantee for its effects to take place." This benefit must also be understood to apply to ejido members who individually seek amparo in defense of their agricultural rights, since a historical and evolutionary analysis of the constitutional and legal reforms relating to "amparo agrado" reveals the existence of a protective regulatory framework that includes both collective subjects (ejidos and population centers) and individuals (ejido members, community members, residents, etc.) who seek to defend their agrarian rights. To argue otherwise would be discriminatory and contrary to the spirit of the Constitution, as it would imply unequal treatment of subjects of agrarian law regulated under the same regime of rights.

Based on the foregoing *and* well-founded arguments, it is hereby

RESOLVE:

SOLE. The suspension requested by

against the omissions attributed to the General Directorate of Process Management /ndt/strfafes and the Supervision, Inspection, and Surveillance Activity /ndzistrfa/, both of the National Security Agency /ndzistrfaf and Environmental Protection of the Hydrocarbons Sector, based in Mexico City, under the terms _____ indicated in the fourth recital of this resolution.

548770" 810038



JUDICIAL BRANCH OF THE FEDERATION

CRYPTOGRAPHIC EVIDENCE - TRANSACTION

Signed File: 77624404_4259000034877081003.p7m

Certifying Authority:

Intermediate Certifying Authority of the Federal Judiciary Council

Signatory(ies): 2

FIRMANTE				
Nombre:	JOSE PABLO HERRERA RAYET	Validity:	GOOD	agent
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.B3.6a.66.32.IXl.00.00.00.IXl.00.00.00.IXl.00.d2.91	Revocation	Good	Do not repeat
Date (UTC/ CDMX)	14/00/24 20.IXl.33 —14/03/24 14.00.33	Status	Good	Valid
Algorithm:	RSA - SHA256			
Signature string:	89 13 78 d6 c4 9f 5c 19 00 41 d3 15 c8 29 ed 6f III 90 03 db 8fd4 a2 86 bd e4 42 2a B2 bf 07 28 5c IXl aa 63 23 04 f9 97 11 59 III ec f15 a4 06 00 cc 6f 31 dc a8 94 85 7b e0 3c 99 2e 08 46 b6 95 04 61 c3 32 63 05 68 a9 42 7c Be 64 65 63 e9 2e d6 88 3e b5 Pot 74 1e 3a e2 Be 16 e0 f5 81 39 S" a6i1 sra OS SU b2 2b f9 46 4f f2 ee c6 3b 05 37 25 07 36 f1 37 c8 2f 03 4b a6 23 3c b6 6e 06 c7 db 45 75 67 e9 7e a3 aa 80 7e c7 80 d1 3f ea 53 c3 f1 88 e3 dc 51 6b 45 ed 6a 20 98 41 e1 a6 61 88 69 bd fd 41 b7 02 86 e8 fa d6 ed f3 aa e5 3e 12 69 D3 36 e6 43 ba 90 89 8c 56 44 07 11 4e III 0c 78 9c 23 f1 81 18 a3 99 18 baB 0a e2 ec 3e 9e 37 d5 97 a0 31 ba ob e5 75 b8 B2 Df ba 06 73 b1 6a e6 fa 4d 92 7c Of 28 b9 6f 38 ad NO 6a d7 1f 50 79 d2 60 cd fc c7 28 m co o6 6b 2e			
OCSP				
Date: (UTC / CDMX)	14/00/24 20.IXl.33 —14/03/24 14.00.33			
Name of respondent:	OCSP ACI service of the Federal Judiciary Council			
Responder issuer:	Auloriaad Intermediate Certification Authority of the Federal Judiciary Council			
Serial number:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.b3.73.70			
TSP				
Date: (UTC / CDMX)	14f05/24 20.00.34 —14/00/24 14.IXl.34			
Name of TSP response issuer:	Time Stamp Authority of the Federal Judiciary Council			
TSP certificate issuer:	Intermediate Ceremonial Authority of the Federal Judiciary Council			
TSP response identifier:	112847070			
Stamped data:	ODMaYia8Ww5Vjn1CAC5tKnqM6c=			



JUDICIAL BRANCH OF THE FEDERATION

FIRMANTE				
Nombre:	ROCIO MONTER REYES	Validity:	GOOD	agent
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.6d.6a.66.32.IXI.00.00.00.IXI.00.00.00.IXI.00.1b.c2	Revocation	Good	No repeat
Date (UTC/ CDMX)	03/14/24 20.DB.58 —03/14/24 14.08.f8	Status	Good	Valid
Algorithm:	RSA - SHA256			
Signature string:	b2 9c 1e cl8c ef 43 57 f2 65 12 07 05 cd 38 d2 ob 1c 07 01 07 b0 89 5a 1B 07 27 47 I9 e3 ba 4b bfa8 78 6c f4 91 f8 de 80 63 c2 f3 68 49 e3 7d 53 37 0c Ba 67 b2 90 07 f1 20 84 b0 e7 66 e2 5d ca 92 35 08 77 3a f5 c1 63 36 14 ed 06 de 4f 1c 1c af ce 72 8d 2d 1b c2 f4 95 b8 7b 5f 64 ee IS efaf 0c 0d lb 26 05 7e 9e fa fi 1 40 fe fe a3 90 51 98 00 2c 3a a3 fa Be 9d 9a c9 7b 95 bd b6 0c d2 58 jia d7 ae 72 89 77 41 6f 25 9b af 26 61 80 e8 b4 01 96 e6 41 29 97 b5 e4 16 4c 58 1a 4c df 3a 6f ee 4c 23 6d d5 fi2 0c c4 a8IO 02 d7 14 8b aa e4 a6 3c b9 6b 18 d8 e3 b2 d1 d0 7a ab 26 95 5ü5ü4DDabDefi{6ce@efBa5A24fnef 83 0e 41 58 c1 45 cd 7a 7b ce 5c a8 f2 8d IS 2a 02 f2 d6 52 ff d6 9c 84 6e 86 2c a5 f8 70 51 de 1c 2fi 9e c3 95 79 ae 2b 99 33 e2 cd 61 93 91 77			
OCSP				
Date: (UTC / CDMX)	08/24/14 20:08:59 —03/24/14 14:08:fi9			
Respondent name:	OCSP ACI Service of the Federal Judiciary Council			
Respondent issuer:	Auloriaad Intermediate Certification Authority of the Federal Judiciary Council			
Serial number:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.b3.73.70			
TSP				
Date: (UTC / CDMX)	14f05/24 20.08.59 —14/00/24 14.08.59			
Name of TSP response issuer:	Time Stamp Issuing Authority of the Federal Judiciary Council			
TSP certificate issuer:	Intermediate Certification Authority of the Federal Judiciary Council			
TSP response identifier:	11285547T			
Stamped data:	GS1A3XfrKhwi/MWTsJ4D8ercGnc=			